

el boom minerero:

patrones e impactos
de la expansión de la
industria extractiva
en España



Amigos de
la Tierra



- + **Coordinación técnica y edición de contenidos**
Adriana Espinosa y María Durán (Amigos de la Tierra)
- + **Redacción y edición de contenidos**
Annabel Roda
- + **Edición de contenidos y supervisión de imagen**
Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra)
- + **Redacción y asesoramiento**
Gonzálo Fernández, Erika González y Pedro Ramiro (Omal)
- + **Diseño y maquetación**
Zuriñe de Langarika Samaniego
- + **Fotografías**
 - + Foto de la portada: Mina Mercedes en Valencia por Ecologistas en Acción
 - + Plataforma Stop Uranio
 - + Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres
 - + Gracias a la web Minob.org, las siguientes plataformas:
Por la defensa de Monte Neme / Asociación Ambiental Senda Nova
Ecologistas en Acción
Veciñal Touro-o Pino Non
Vida e ria
 - + Desde Pixabay:
Imagen de la minería a cielo abierto (pag.13), por S. Hermann / F. Richter
Imagen del icono del coche eléctrico (pag. 13), por Markus Distelrath
Imagen de las máquinas-minería es (pag. 15), por Alex Banner
Imagen nocturna de la excavación (pag. 15), por nettetal10
 - + Desde Freepik:
La base del mapa de la figura 2 y el fondo topografico del informe
La idea de las flechas de la infografía de la figura 3, diseñada por Katemangostar



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional



Octubre de 2022

Introducción 5

1 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 8

1.1 El capitalismo verde y la agenda
de la Transición Ecológica y Digital 10

2 El modus operandi de los megaproyectos 14

2.1 Patrones corporativos 16

2.2 Impactos sistémicos 18

3 El extractivismo minero en España 20

3.1 Touro 24

3.2 San Finx 29

3.3 San José Valdeflórez 33

3.4 Retortillo 37

4 Conclusiones 41

5 Notas 43



BEZELLE Y
FUERA DEL
CAMP CHARRO

SOMOS DESPOPRETE

AL URANIO
LA VIDA

POR LA NATURALEZA, LA GANADERÍA,
LA SALUD Y EL FUTURO
CAMPO CHARRO Y SALAMANCA DI
A LA MINA



El suministro y el control de los recursos minerales aparece hoy como una cuestión central para el sostenimiento de la economía europea. Las actuales políticas de las instituciones europeas, enmarcadas en el discurso de la transición energética y digital, han multiplicado el interés y la necesidad de acceso a cada vez más minerales, tal y como reconocen el Pacto Verde y las recientes estrategias y planes sobre industrialización y materias primas. Las placas fotovoltaicas, las turbinas eólicas y las baterías eléctricas necesitan aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso, cobalto, tierras raras y litio, entre otros minerales. Ante este panorama, surge una relación estrecha entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea, que tiene como consecuencia el incremento del número de proyectos mineros que se pretenden explotar dentro de las fronteras europeas.

En el caso de España, las solicitudes de licencias de explotaciones mineras han ido en aumento tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008. Desde ese momento, se produce un repunte de los precios de los metales que lleva a muchas compañías y fondos de inversión españolas a introducirse en la minería especulativa. Un modelo de negocio en el que no importa tanto la extracción de minerales como la especulación con los derechos sobre los mismos. Los beneficios potenciales se convierten en elementos con los que negociar inversiones a futuro y fomentar la rueda de la especulación financiera, antes incluso de que tenga lugar la extracción de minerales.

Explotaciones mineras que son, a su vez, desarrolladas bajo la visión de un megaproyecto. Es decir, iniciativas empresariales de significativo tamaño y volumen de inversión con el objetivo de apropiarse de territorios y bienes naturales en favor de la acumulación de capital. Se trata de un fenómeno sistémico que se reproduce en territorios periféricos y semiperiféricos del planeta, pero también en los centros del sistema. Su impulso recae tanto en el capital público como en el privado, siendo las empresas transnacionales las principales protagonistas de la cadena internacional de entidades que participan y son responsables de cada megaproyecto, desde su financiación hasta el desarrollo efectivo de su actividad. Aunque los megaproyectos abarcan una diversidad de sectores económicos, el minero-energético es uno de los que más iniciativas de este tipo acumula.

Movilizaciones
frente a la
mina de uranio,
Salamanca



1. Corta de Las Cruces
2. Infraestructura minera abandonada en Monte Neme

Bajo este fenómeno sistémico, se ha realizado una investigación para analizar el proceso de expansión de las compañías mineras ligado al aumento de la demanda de minerales asociados a la transición energética y digital. Un análisis que abarca los patrones que habitualmente siguen las grandes empresas en su implementación y los impactos económicos, ambientales, políticos y socioculturales vinculados a este tipo de operaciones. La tercera pata de este marco de análisis son las claves de resistencia social a los megaproyectos, dimensión que se recoge de forma breve en este informe y que se analizará con más profundidad en una publicación posterior. A partir de este marco teórico, se estudian cuatro casos de proyectos mineros que se están tratando de desarrollar en estos momentos en el Estado español: las minas de Touro y San Finx (Galicia), de San José Valdefórez (Extremadura) y de Retortillo (Castilla y León). A pesar de que son cuatro megaproyectos mineros ubicados en diferentes territorios del Estado español, operados por diferentes empresas y de los que se extraen diferentes minerales, son casos paradigmáticos de la dinámica planetaria seguida por los megaproyectos.

Frente al discurso hegemónico que vincula estos megaproyectos con el progreso, la creación de empleo y el volumen de las inversiones, los resultados de aplicar este marco de referencia a estos cuatro casos sacan a la luz muchas afectaciones que este tipo de iniciativas suelen provocar, pero que suelen permanecer ocultas de manera deliberada.




Movilizaciones
frente a la
mina de uranio,
Salamanca

1. ¿Cómo hemos

llegado hasta aquí?



Balsas abandonadas
en Monte Neme



La minería fue uno de los primeros sectores económicos del capitalismo industrial en España. En el siglo XIX, a fin de satisfacer la demanda de materias primas por parte de la floreciente industria británica y centroeuropea, surgieron algunos enclaves minero-industriales en diferentes puntos del territorio español como los yacimientos de pirita en Riotinto o de plomo en Sierra Morena. En estos “islotos de industrialización”, impulsados en la mayoría de los casos por capitales extranjeros, las compañías eran quienes se encargaban de proporcionar trabajo, vivienda, alimentación, escuela y hospital a los mineros.

Hasta la Segunda República, las principales actividades empresariales tuvieron que ver con el ferrocarril, el transporte marítimo, la siderurgia, las finanzas y la minería. España comenzó a jugar el papel de “periferia del centro”, que aún mantiene en nuestros días¹, aunque la economía del país no abandonó su componente agrario-rural hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX. Tras la victoria de Franco, el papel de las empresas extranjeras en el ferrocarril, la minería y la electricidad, que había sido central en los comienzos del capitalismo industrial en el país durante el siglo XIX y principios del XX, pasó a ser marginal. En contrapartida, el aislamiento internacional trajo una gran alianza político-empresarial apoyada, primero, por el régimen franquista y, más tarde, por los sucesivos gobiernos elegidos después de la Transición. Sectores estratégicos como las finanzas, la energía, las telecomunicaciones, la construcción o el turismo pasaron a ser controlados por un reducido grupo de empresas². En la década de 1990, en pleno triunfo global del neoliberalismo, ese pequeño grupo de empresas españolas se transformó en multinacionales.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera y el *crash* global, se produjo un significativo auge de los proyectos mineros en el Estado español. El repunte de los precios de los metales en la década pasada llevó a que muchas compañías y fondos de inversión se introdujeran en la minería especulativa, dejando de lado sus posibles efectos socioecológicos y centrándose únicamente en la maximización del beneficio a corto plazo. Solo en el año 2018 llegaron a presentarse más de 2.000 solicitudes para iniciar operaciones de minería. Sin embargo, el reciente interés de inversión en el sector minero no solo ocurre en el escenario español sino que forma parte de una pieza más del gran puzle del capitalismo global.

1.1

El capitalismo verde y la agenda de la Transición Ecológica y Digital

Controlar el territorio y la naturaleza es la base material del capitalismo global, es decir, mercantilizar y comercializar todos los recursos naturales posibles. En un planeta finito de recursos, el traspaso de los límites biofísicos conduce a la pérdida de biodiversidad, al cambio climático y al agotamiento de materiales y energías fósiles que alimentan el metabolismo del sistema de producción y consumo.

En todas las crisis de rentabilidad precedentes, el capitalismo ha logrado sobrevivir gracias a su reinención de nuevas formas de extracción y apropiación de la riqueza. En las décadas anteriores, la expropiación, la mercantilización, la privatización y la financiarización han servido para reorientar los siguientes ciclos de crecimiento y acumulación³. Hoy, por el contrario, el fin de la era de los combustibles fósiles, la aceleración de las crisis energéticas y los impactos socioambientales del modelo económico imposibilitan que el capitalismo utilice las vías que le llevaron al éxito en el pasado para reemprender el camino de la acumulación.

Ante la dificultad para continuar incorporando bienes y servicios a la lógica mercantil, la mayor apuesta del capitalismo global se vincula con la

automatización y la digitalización de la economía⁴, conocida también como la transición verde y digital. De cara al exterior, las élites político-económicas tratan de resolver el dilema trazado por la crisis ecológica a partir de las innovaciones en la eficiencia con la utilización de materiales y la transición a una matriz energética basada en el uso de energías renovables. Lo que ocurre es que estas propuestas enmarcadas en el *solucionismo tecnológico* requieren de la explotación de una elevada cantidad de recursos minero-energéticos finitos y cada vez menos accesibles. Un análisis que limita la emisión de gases de efecto invernadero durante la producción de energía o el uso de determinados aparatos sin tener en cuenta el gran consumo de materiales que necesita esta transición verde y digital. Es el caso de los vehículos eléctricos en cuya construcción se estima el uso de cuatro veces más cobre que en los coches que funcionan con combustible fósil⁵. Frente al urgente cambio de rumbo necesario para hacer frente al colapso ecológico, los grandes intereses políticos y económicos conciben este escenario como una renovada oportunidad de negocio.

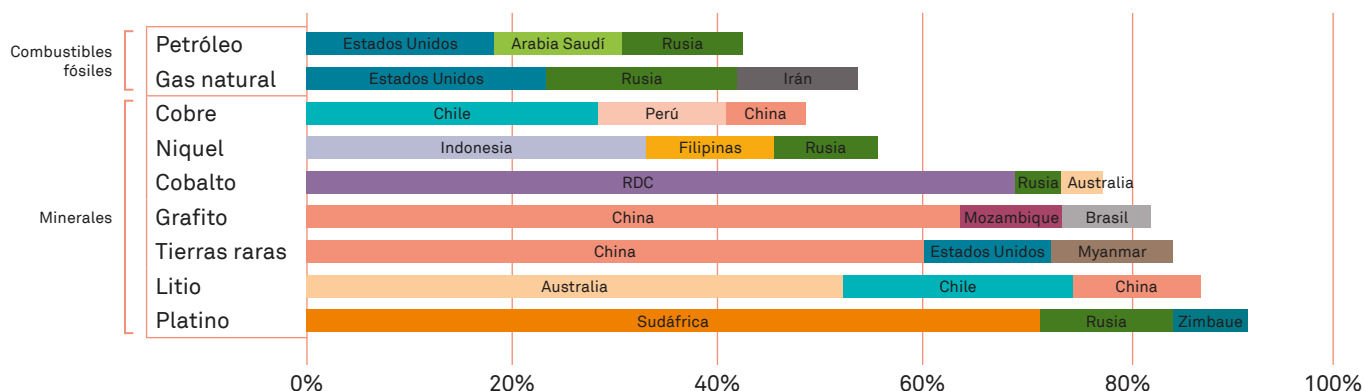
El creciente interés en la minería por parte de empresas e inversores responde a estas expectativas de nuevos nichos de negocio que hacen posible el capitalismo verde y digital. Se calcula que la ampliación de las tecnologías solar y eólica provocarán un

El repunte de los precios de los metales en la década pasada llevó a que muchas compañías y fondos de inversión se introdujeran en la minería especulativa. Solo en el año 2018 llegaron a presentarse más de 2.000 solicitudes para iniciar operaciones de minería

+

FIGURA 1

Principales países productores de minerales y combustibles fósiles a nivel global en 2019, vinculadas al capitalismo verde y digital



+ Fuente: Agencia Internacional de Energía (2021)

aumento del 600% en la demanda de metales (aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso, cobalto, tierras raras y litio, entre otros) para el año 2030⁶. Las políticas enmarcadas en el discurso de la transición energética y digital han multiplicado el interés y la necesidad de acceso a cada vez más minerales, tal y como ha reconocido el Pacto Verde Europeo⁷.

Sin embargo, existe una elevada dependencia exterior de los países de la Unión Europea de acceso a estos recursos. La actividad extractiva de minerales —que configuran la base física de la digitalización y del formato industrial de las energías renovables— no llega a representar el 1% del PIB de la economía de los 27 y genera unos escasos 30.000 empleos. La gran mayoría de estos minerales se encuentran en otras regiones del planeta. China controla el 85% de las tierras raras que se utilizan en las tecnologías digitales y los vehículos eléctricos; mientras que Australia es el principal productor de litio utilizado en las baterías y las reservas de este material se concentran en el triángulo conformado por Bolivia, Chile y Argentina⁸.

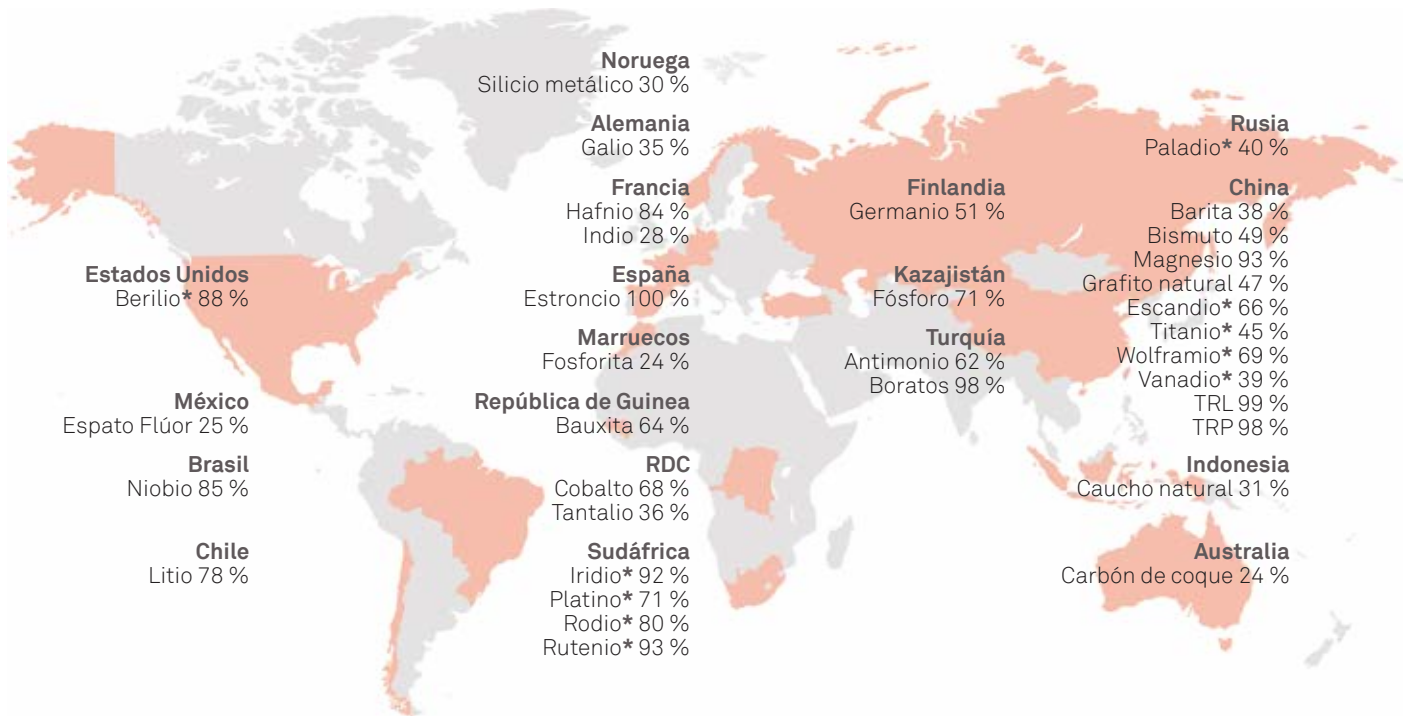
Para hacer frente a esta realidad, el Parlamento Europeo se ha posicionado para exigir más extracción mineral dentro de las fronteras europeas de cara a “asegurar la autonomía y la sostenibilidad de la Unión Europea en la producción de dispositivos de alta tecnología”. Una posición que da por hecho

que un incremento del reciclaje será insuficiente para responder a la elevada demanda de las economías digitales, que las extracciones son “neutrales desde el punto de vista climático” y anima a la “extracción sostenible” en los países que disponen de estos materiales⁹.

Al mismo tiempo, en la ejecución de los actuales fondos europeos *Next Generation* se consideran prioritarios los proyectos relacionados con las energías renovables, el coche eléctrico, el hidrógeno verde y la digitalización, por lo que estos van a concentrar las principales inversiones de cara a la “recuperación económica” tras la pandemia. Planes, iniciativas y disposiciones presupuestarias que se trasladan de Bruselas a los Estados miembros.

En el caso de España, se ha aprobado una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales¹⁰ y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”¹¹. Existe, por tanto, una relación estrecha entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea y española. Con una consecuencia directa: el crecimiento del número de proyectos mineros que se pretenden explotar, tanto en el exterior como en el interior de la Unión Europea. Y esta realidad se plasma en el incremento de las solicitudes de licencias y de explotaciones mineras en el Estado español.

+

FIGURA 2**Principales proveedores de materias primas fundamentales a la UE**

* Porcentaje de la producción mundial

+ Fuente: Comisión Europea (2020)

Los proyectos mineros explotados con interés de lucro tienen, a su vez, unos patrones e impactos que se identifican con la lógica de los megaproyectos¹², un fenómeno que ocurre en cualquier parte del planeta. Bajo el mando de empresas transnacionales, estas iniciativas empresariales se apropian de territorios y bienes naturales en favor de la acumulación de capital amparadas por la arquitectura político-jurídica de la impunidad en la que operan las grandes empresas, en una más que evidente asimetría normativa entre la justiciabilidad y exigibilidad de sus intereses corporativos, por un lado, y los derechos colectivos, por el otro.

A su paso, dejan impactos económicos, políticos, socioculturales y ambientales para el planeta y las mayorías sociales y los pueblos donde se implantan. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, existen 323 conflictos socioambientales relacionados con la extracción de cobre, litio, plata y

tierras raras. En el caso del litio, su explotación para las baterías de dispositivos electrónicos y el coche eléctrico está concentrada en pocas compañías, las principales son Albemarle y SQM¹³. El relato de la electrificación de la movilidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de la digitalización se sostiene, en realidad, sobre la destrucción ambiental y la sobreexplotación de agua dulce de los salares de Argentina, Bolivia y Chile.

De Bangladesh a Marruecos, de Colombia al sur de Europa, puede observarse un *modus operandi* del capital transnacional que se replica por todo el mundo, trazando una línea de continuidad entre el creciente poder de las grandes corporaciones y la multiplicación de sus impactos socioambientales. Entre ellas, se incluyen aquellas que protagonizan el “capitalismo verde y digital” y que supuestamente utilizan tecnologías que pretenden ser ambientalmente más respetuosas.



El análisis de las élites político-empresariales limita la emisión de gases de efecto invernadero durante la producción de energía o el uso de determinados aparatos sin tener en cuenta el gran consumo de materiales que necesita la transición verde y digital. Es el caso de la construcción de los vehículos eléctricos que necesitan cuatro veces más cobre que los coches que funcionan con combustible fósil

2. El *modus*

operandi de los

megaproyectos

Mega. (Del gr. *μεγα-* mega-).

Proyecto. (Del lat. *proiectus* 'proyectado').

m. Iniciativa de cierta escala y tamaño liderada por empresas transnacionales para apropiarse de territorios y bienes naturales en favor de la acumulación de capital. Su desarrollo llega a todas las fases de la cadena global de valor y puede ubicarse tanto en las periferias y semiperiferias del planeta como en los centros del sistema. Se considera un fenómeno sistémico.

La diversidad es una de las principales características que define el fenómeno de los megaproyectos. Como señalábamos en el anterior apartado, se trata de iniciativas de cierta escala y tamaño lideradas por empresas transnacionales para apropiarse de territorios y bienes naturales en favor de la acumulación de capital. Su desarrollo llega a todas las fases de la cadena global de valor (extracción, producción, distribución, consumo, infraestructuras). Su afectación, a su vez, no se limita únicamente a las periferias y semiperiferias del planeta, sino que también abunda en los centros del sistema¹⁴. Hoy en día, son un fenómeno sistémico.

En el contexto del capitalismo verde y digital en el que nos encontramos, cobran especial protagonismo iniciativas vinculadas a las energías renovables (parques eólicos y fotovoltaicos, grandes centrales hidroeléctricas, iniciativas de hidrógeno verde), a la minería de materiales críticos para la nueva economía digitalizada¹⁵ (tierras raras, litio, níquel, zinc, plomo, platino, cadmio, telurio, manganeso, etc.), así como a infraestructuras, transporte, logística y distribución para refuerzo de los mercados globales. Sin olvidar, la minería más clásica como el oro, la plata, el carbón y los hidrocarburos.

La variedad de tipologías de megaproyectos, por lo tanto, es muy amplia, y la identidad específica de cada caso depende de la trayectoria y proceder de las empresas involucradas, del objeto del megaproyecto y su relevancia en términos económicos y geopolíticos, de sus previsible impactos, del marco político y regulatorio del territorio en el que se desarrolla, así como de la cohesión, articulación y capacidad de movilización de las comunidades involucradas, entre otras variables.

Esta diversidad, no obstante, no invalida la constatación de parámetros comunes en el desarrollo de la mayoría de los megaproyectos, independientemente de su naturaleza concreta¹⁶. Más allá de lógicas particulares que necesariamente puedan desarrollarse en cada caso, se puede afirmar, en primer lugar, que existen unos patrones



de actuación que caracterizan el desempeño de las empresas transnacionales en la implementación de este tipo de iniciativas corporativas. En segundo lugar, los megaproyectos generan impactos sobre comunidades, mayorías populares y el planeta en términos económicos, ambientales, políticos y socioculturales. Unos efectos que son sistematizados y analizados a través de las perspectivas de clase, género y etnia/raza. Finalmente, el tercer parámetro común al fenómeno de los megaproyectos tiene que ver con la resistencia popular, es decir, experiencias comunitarias y sociales a lo largo de las últimas décadas que han servido para poner freno al avance corporativo¹⁷.

A continuación detallamos en profundidad los dos primeros parámetros de los megaproyectos a través de cuatro casos de proyectos mineros que se están tratando de desarrollar en estos momentos en el Estado español: las minas en Touro y San Finx (Galicia), en San José Valdefórez (Extremadura) y en Retortillo (Castilla y León).


17. Este informe se centra en el análisis de los dos primeros parámetros comunes a los megaproyectos, esto es los patrones de comportamiento y los impactos. Para una descripción de las claves de resistencia, véase Gonzalo Fernández, Erika González, Juan Hernández y Pedro Ramiro, *Megaproyectos: claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde y digital*, OMAL, 2022.

2.1 Patrones Corporativos

La primera característica que define la actuación de las empresas transnacionales en el impulso de megaproyectos es la **opacidad**. Una opacidad que hace referencia, en primer lugar, a la maraña de entidades que participan en la cadena global del megaproyecto, desde su financiación hasta su ejecución, dificultando de este modo la transparencia sobre quién y en qué medida es responsable del mismo. En segundo término, se vincula también con una gestión política poco transparente, en el que las alianzas público-corporativas suelen imponerse sobre los derechos de información pública y toma democrática de decisiones. Por último, la opacidad también es la seña de identidad del relato hegemónico con el que se acompaña el intento de legitimación política y social de la iniciativa empresarial. Se difunde de esta manera un imaginario de progreso, bienestar y oportunidades económicas, que oculta y/o minimiza los impactos negativos que estos procesos empresariales conllevan.

Continuando con la caracterización de los patrones corporativos, posicionamos la **multidimensionalidad** en la actuación de las grandes empresas como segunda seña de identidad. Esta se refiere a la diversidad de estrategias económicas, político-jurídicas, culturales y comunicativas utilizadas por las empresas transnacionales para posibilitar la puesta en marcha y consolidación del megaproyecto. En este sentido, y dentro de esta multidimensionalidad de iniciativas complementarias, no duda en combinar enfoques de diferente naturaleza y en orden determinado.

En primera instancia, se pretende hacer valer el relato hegemónico positivo en torno al megaproyecto: creación de empleos, llegada de inversiones, transferencia tecnológica, apoyo al tejido empresarial local, etc., incidiendo para ello tanto en la cooptación de liderazgos sociales, políticos y/o religiosos como en la promoción de iniciativas asistenciales —escuelas, pequeñas infraestructuras, espectáculos culturales—, enmarcados en los programas de responsabilidad social corporativa. Si no fuera suficien-



La cadena global del megaproyecto de la mina de cobre de Touro

La mina de cobre de Touro estuvo operativa desde 1973 hasta 1986. Desde entonces, la mina se ha utilizado para la extracción de áridos para la construcción. Actualmente, la corporación transnacional Atalaya Mining, domiciliada en Chipre y cuyo principal accionista es la multinacional suiza Trafigura, está impulsando —en connivencia con la propietaria Explotaciones Gallegas— la apertura de la explotación a través de la filial Cobre San Rafael.

En 2017, Atalaya Mining compró el 10% del capital social de Cobre San Rafael, en el marco de un acuerdo en cuatro etapas que iba a permitir a la compañía llegar a adquirir hasta el 80% de la empresa que anteriormente explotaba la mina de Touro.



La estrategia legitimadora de la mina de uranio en Retortillo

Berkely, la empresa que solicita los permisos para explotar la mina de uranio en Retortillo, trata de mantener una buena relación con la comunidad local apoyando con financiación las actividades de las corporaciones municipales de la zona donde se ubica la mina. Desde que se inició el proyecto en 2016 la compañía ha realizado contribuciones económicas por valor de 470.000 euros a los municipios de Retortillo, Villavieja y Villares de Yeltes. Estas aportaciones se han realizado en el marco del acuerdo de colaboración firmado por la empresa y los ayuntamientos, que ha servido para la mejora de instalaciones deportivas, estaciones de depuración de aguas, parques públicos, etc.

te, se pone en marcha la dinámica de división en la comunidad, creando nuevas disputas o agudizando conflictos preexistentes. Si el rechazo y la resistencia persisten, puede darse paso a la lógica represiva, que combina la vía legal y la criminalización de la protesta, aprovechándose de la arquitectura de la impunidad corporativa y de la alianza público-corporativa.

Llegamos así al tercer patrón compartido en la actuación corporativa: la **adaptabilidad** desde la que se plantean la vigencia y duración de los megapro-

yectos. Mientras que algunos parten de un enfoque cortoplacista —en el que la lógica especulativa se impone incluso a la propia implantación productiva de la iniciativa—, otros se proyectan en el largo plazo, en función de los retornos esperados y de la inversión realizada. Pese a la oposición social, política y/o judicial que pueda surgir, persisten en su apuesta y aprovechan la enorme asimetría de poder entre multinacionales y comunidades erosionando las resistencias populares y confiando en su agotamiento progresivo.



El enfoque temporal flexible de la mina de litio en Cáceres

Tecnología Extremeña del Litio ha presentado el aval de la Comisión Europea como respaldo, pero el Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado otorgar los permisos de explotación. Por su parte, la empresa minera ha elevado un recurso de alzada y ha amenazado con presentar un recurso contencioso-administrativo.

En mayo de 2021, el Ayuntamiento aprobó una moción que instaba a blindar la zona ambientalmente. A pesar de esta oposición, la empresa intenta seguir adelante y presentó en octubre de 2021 el cambio de tipo de extracción, de cielo abierto a subterránea. El consorcio minero asegura seguir desarrollando el proyecto técnico y ha firmado hacer un acuerdo no vinculante con LG Energy Solution a la espera de que se resuelvan los permisos.

2.2

Impactos sistemáticos

Aunque las consecuencias de cada proyecto específico dependen de las condiciones concretas de cada caso —el radio global de las empresas transnacionales, su prioridad por la acumulación de capital, el contexto de crisis ecológica o el modelo de gobernanza corporativa vigente—, se dan lugar un patrón de impactos que podemos vincular a la identidad del fenómeno de los megaproyectos.

Se trata de un marco de cuatro categorías (económica, política, ambiental y sociocultural) atravesado por los enfoques transversales de clase, género y étnica/raza, el cual permite analizar y evaluar el conjunto de dimensiones que podrían tener una especial afectación social y natural en función de la situación y posición de sujetos y sectores determinados. A pesar de las posibles dicotomías que puede generar el establecimiento de cuatro categorías diferentes en el análisis del impacto del poder corporativo y los megaproyectos, se opta en la investigación de este informe por mantener la desagregación entre sociedad y naturaleza a efectos pedagógicos.

En este sentido, los megaproyectos impactan de manera desigual en función de la clase, siendo los sectores populares con menor acceso a recursos

y con menor capacidad de incidencia los que sufren especialmente sus embates. Al mismo tiempo, las lógicas derivadas de los megaproyectos (desposesión de bienes comunes, masculinización vinculada a la centralidad del salario, fortalecimiento de liderazgos patriarcales, dinámicas y relatos excluyentes, etc.), convierten al género en una clave estratégica de estudio, ya que abonan un marco heteropatriarcal que afecta de manera más intensa y diversa a las mujeres¹⁸. Finalmente la etnia/raza, en una sociedad atravesada por la colonialidad, el occidente-centrismo y la exclusión, es una categoría indispensable para evaluar a unos megaproyectos que suelen basarse en la división de la comunidad y la búsqueda de chivos expiatorios.

Comenzando por la primera dimensión, el **impacto económico** hace referencia así tanto a indicadores más clásicos (propiedad y calidad del servicio/bien, gasto público, beneficios corporativos, condiciones laborales) como a otros que analizan el impacto del megaproyecto sobre la base material colectiva necesaria para sostener la economía (tejido económico local, propiedad y acceso a bienes comunes, distribución de los trabajos, migraciones de carácter económico).

Segundo, el **impacto ambiental** derivado de un megaproyecto es aquel que afecta a los flujos de

Las consecuencias económicas de la mina de estaño y wolframio de Lousame

La contaminación producida por la mina San Finx en Lousame, operativa durante casi un siglo y reabierta desde 2009, se extiende por toda la ría de Muros-Noia ubicada a tan solo siete kilómetros aguas abajo de la mina. En la zona, más de 1.500 familias viven del marisqueo. En los años treinta se construyó una presa con capacidad para almacenar residuos mineros que colapsó en 1960 causando un importante vertido de lodos que afectaron al río San Finx. A día de hoy, la destrucción generada no ha sido asumida por ninguna de las empresas que han explotado la mina durante más de 100 años sino por la población local y por las administraciones públicas. La perspectiva de otra ruptura de una de las presas con residuos mineros, que ahora se encuentra abandonada, es lo que ha levantado la oposición de la población a este proyecto minero. La posible destrucción de los ríos, arroyos y ría pondría en riesgo la actividad económica de una parte importante de la comunidad local.





La dimensión política de la mina de uranio en Retortillo

La declaración de impacto ambiental para sacar adelante el proyecto minero debía haberse realizado en el Ministerio de Medio Ambiente -ahora Ministerio de Transición Ecológica-, pero fue el gobierno autonómico de Castilla y León quien efectuó la declaración y fue positiva. Una vez aprobada la declaración ambiental (de forma irregular), el ministro de industria en aquel momento, José Manuel Soria, aprobó una autorización previa para abrir la mina y la Confederación Hidrográfica un permiso para los vertidos.

Los concejales del gobierno municipal de Retortillo, municipio donde se localiza el proyecto, eran a la vez trabajadores de Berkeley, la empresa impulsora del megaproyecto. Por su parte, la compañía firmó convenios de colaboración con los ayuntamientos implicados en los que se recogía la obligación de éstos de emitir informes favorables en la tramitación de permisos.

materiales, energía y residuos; a la apropiación corporativa de los bienes naturales indispensables para la reproducción de las vidas; a la incidencia en términos de contaminación y degradación de los ecosistemas, así como al incremento del riesgo de desastres (deforestación, inundaciones, incendios, etc.).

En el concepto de **impacto político** del megaproyecto se inserta toda dinámica de alteración del desarrollo de una contienda política en la que participan y se posicionan necesidades, intereses y sujetos diferentes, en base a dinámicas tanto legales como alegales, e incluso ilegales. En este sentido, la disputa jurídico-legal forma parte de este impacto ya que en última instancia es la vía en la que la contienda política se legitima dentro del marco vigente. También se incluyen las lógicas opacas basadas en la alianza público-corporativa: información, toma de decisiones, cooptación, cambios normativos,

ayudas públicas, judicialización y criminalización. Asimismo, se incorporan iniciativas que se desarrollan en lógica alega e ilegal de cara a alterar el resultado de dicha contienda como: la corrupción, la violencia y la represión o bien, el desmantelamiento de mínimos democráticos como el derecho a consulta previa, libre e informada.

Finalmente, en la categoría de **impacto sociocultural** se inserta toda transformación en la sociología de las comunidades y poblaciones afectadas (valores de salud y salubridad, desigualdades, cohesión social, diversidad cultural), así como cualquier alteración en las dinámicas culturales y sociales previas al megaproyecto, con especial atención al refuerzo o creación de formas de exclusión, dominación y violencia vinculadas al predominio del relato y práctica de la iniciativa empresarial (repatriarcalización, racismo, delitos de odio).

3. El extractivismo minero en España

El repunte de los precios de los metales en la década pasada junto al estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera y el *crash* global en 2008 llevó a que compañías y fondos de inversión se introdujeran en la minería especulativa en el Estado español.

Este *boom* minero se produce principalmente por tres factores. El primero, una reorganización financiera que ha posibilitado que pequeñas empresas se dediquen a las inversiones en los negocios mineros gracias a su elevado componente especulativo, el cual crea un ciclo de actuación de las empresas inversoras en minería (véase la figura Ciclo de

minería especulativa). En segundo término, los planes y estrategias europeos basados en la transición verde y digital, apoyados en un aumento de la extracción de minerales y materias primas críticas. Y en tercer lugar, una legislación española anticuada y desactualizada con la que es imposible responder a los requerimientos socioambientales que demanda este tipo de proyectos¹⁹. Todo ello, en el marco de un fuerte apoyo y subvenciones por parte de las instituciones públicas, así como de una arquitectura jurídica internacional que permite a las compañías mineras demandar a los Estados si se establecieran moratorias para sus actividades o se denegaran las licencias para las operaciones mineras.

Hasta 2021 se habían registrado 548 licencias de proyectos mineros metálicos por todo el territorio español. Detrás de estas licencias se encuentran grandes corporaciones transnacionales que proceden fundamentalmente de Australia y Canadá, como Emerita Resources y Qbis Resources presentes en Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León

+

FIGURA 3

Ciclo de la minería especulativa



Hasta 2021 se habían registrado 548 licencias de proyectos mineros metálicos por todo el territorio español²⁰. Detrás de estas licencias se encuentran grandes corporaciones transnacionales que proceden fundamentalmente de Australia y Canadá, como Emerita Resources y Qbis Resources presentes en Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León. De las 26 grandes empresas con licencias mineras en España²¹, tan solo hay

dos que su país matriz sea el Estado español (Mining Hill y Sacyr). Hasta hace poco tiempo era Valoriza Minería, filial de la constructora Sacyr, la empresa española que tenía un papel protagonista en el sector minero del país. Pero las rentabilidades esperadas en la apuesta minera parece que no se cumplieron y, desde finales de 2021, Sacyr ha ido vendiendo su participación en importantes yacimientos: primero en Extremadura y Andalucía, luego en Galicia.

+

FIGURA 4**Grandes empresas con licencias mineras en España**

Empresa	País de la matriz	Comunidad autónoma
Auex Ventures	Canadá	Andalucía
Avanced Metallurgical Group (AMG)	Alemania	Extremadura
Berkeley Energia	Australia	Castilla y León y Extremadura
Cape Clear Minerals (Goldtrex, Geotrex)	Australia	Andalucía y Castilla-La Mancha
Edgewater	Canadá	Galicia
Emerita Resources	Canadá	Andalucía, Asturias y Extremadura
First Quantum Minerals	Canadá	Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia
Freeport-McMoRan	Estados Unidos	Andalucía
Goldquest	Canadá	Castilla y León y Galicia
Infinity Lithium	Australia	Extremadura
Magtel	España	Andalucía
Mineworx Technologies	Canadá	Castilla y León
Mining Hill (comparte consejeros con Valoriza Minería)	España	Castilla-La Mancha
Navan Resources	Reino Unido/Irlanda	Andalucía
Ormonge Mining	Irlanda	Galicia
Orvana Minerals	Canadá	Asturias
Pacific Strategic Minerals	Panamá	Galicia
Qbis Resources	Australia	Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura
Sacyr (Valoriza Minería)	España	Aragón
Sandfire MATSA	Australia	Andalucía y Extremadura
Sierra Mining	Australia	Castilla y León y Galicia
Solid Mines	Canadá	Galicia
Tungsten Mining	Australia	Castilla y León
Trafigura (mayor accionista de Atalaya Mining)	Suiza	Andalucía, Extremadura y Galicia
Western Metallica	Canadá	Asturias
W Resources	Reino Unido/Irlanda	Extremadura

+ Fuente: *catastro minero del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Catastros mineros de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura y Galicia.*

Actualmente, las solicitudes de proyectos mineros se suceden a lo largo de la geografía española, incluso en prospecciones marinas en las islas Canarias. Aunque **el 95% de las licencias mineras de minerales metálicos utilizados en tecnología y digitalización se sitúan en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura, por este orden.** El 40% de todas estas licencias son de investigación y exploración. Los minerales que abarcan estas licencias son: aluminio, cobalto, cobre, grafito, estaño, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, uranio, vanadio, wolframio.

Si bien, la gran parte de yacimientos de estas materias primas se ubican en la mitad occidental de la Península Ibérica. Los yacimientos de cobre y plata se concentran en Andalucía, especialmente en Huelva y Sevilla. Ambas hacen parte de la Faja Pirítica Ibérica, una zona geográfica que se extiende desde Portugal hasta Sevilla con importantes depósitos de sulfuros resultado de la actividad volcánica hace millones de años y que ha generado estos yacimientos de cobre y plata. La producción de oro se concentra en Asturias y la de estaño y wolframio está localizada sobre todo en Galicia. Por su parte, Castilla y León suscita interés minero por la posibilidad

de explotar wolframio y uranio. La rentabilidad de la minería metálica se refleja en el valor de producción de estos elementos; mientras que por número de explotaciones no llegan al 1%, concentran más de un tercio de los ingresos generados en minería.

En este contexto, se han escogido cuatro de estos proyectos —dos en Galicia, otro en Extremadura, un cuarto en Castilla y León—, por ser operados por diferentes empresas, estar situados en diferentes territorios y albergar reservas de diferentes minerales. **En Touro se pretende seguir explotando el cobre, muy demandado en vehículos eléctricos e infraestructura eólica; en San Finx se quiere seguir extrayendo estaño y wolframio, utilizado para dispositivos digitales, aparatos de control, instalaciones de energías renovables; en San Juan de Valdeflórez el proyecto quiere extraer litio para la producción de baterías de dispositivos tecnológicos y energías renovables; en Retortillo se ha intentado llevar adelante un proyecto de extracción de uranio para sostener la energía nuclear.** Todos ellos ilustran los patrones corporativos y los impactos sistemáticos asociados a los megaproyectos mineros, pero también muestran una de las vías para ampliar las resistencias y fortalecer las luchas sociales frente al poder corporativo²².

El 95% de las licencias mineras de minerales metálicos utilizados en tecnología y digitalización se sitúan en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura

3.1 La mina de cobre de Touro, A Coruña

- 📍 Localización: **Touro, A Coruña, Galicia**
- 🏠 Mineral: **Cobre**
- 👤 Empresa: **Atalaya Mining**
- ⚙️ Estado: **Cerrada**
- 📖 Historia: **Operativa entre 1973 y 1986**
- 📄 Más información: www.cobresanrafael.gal/

+



Patrones: ¿cómo operan las empresas?

Opacidad

Cadena global del megaproyecto

La mina de cobre de Touro estuvo operativa desde 1973 hasta 1986. Desde entonces, la mina se ha utilizado para la extracción de áridos para la construcción. Actualmente, la corporación transnacional Atalaya Mining, domiciliada en Chipre y cuyo principal accionista es la multinacional suiza Trafigura, está impulsando —en connivencia con la propietaria Explotaciones Gallegas— la apertura de la explotación a través de la filial Cobre San Rafael.

En 2017, Atalaya Mining compró el 10% del capital social de Cobre San Rafael, en el marco de un acuerdo en cuatro etapas para adquirir hasta el 80% de la empresa.

Desarrollo de la contienda política

En 2019 la Xunta otorgó subvenciones a la Cámara Oficial Minera de Galicia, conformada por la mayoría de las empresas mineras —entre ellas, Cobre San Rafael—, para lanzar un “plan de comunicación de la minería sustentable para Galicia”.

Relato oficial

El discurso de la compañía pasa por el fomento de la “minería compatible con la naturaleza y la promesa del incremento del empleo.

Según Cobre San Rafael, el objetivo a medio plazo es invertir 200 millones durante los 15 años de vida del proyecto, lo que redundaría en la creación de 400 empleos directos. La compañía promete que esos puestos de trabajo serán ocupados al 90% por vecinos de la zona, a los que se harán contratos indefinidos. A la vez, estima que se generarán otros 1.000 empleos indirectos.

En base a los estudios avalados por la minera, el primer año del proyecto Touro tendría un impacto sobre el conjunto del tejido productivo de Galicia equivalente al 0,16% de su PIB (2015), esto es, alrededor de 91 millones de euros.

Multi-dimensionalidad

Estrategia legitimadora

El enfoque de legitimación del proyecto se basa en potenciar su impacto económico, que la empresa calcula que en la economía gallega significaría unos 2.500 millones de euros, dos tercios de ellos en la zona de influencia del proyecto.

Asimismo, la compañía ha diseñado una cuidada estrategia de Responsabilidad Social Corporativa basada en el patrocinio de equipos deportivos, obras de limpieza y mejoras ambientales, visitas de colegios profesionales y campañas de comunicación. Además, la empresa cuenta con la colaboración de investigadores de las universidades públicas gallegas y de otros organismos científicos gallegos e internacionales.

Estrategia coercitiva

La plataforma Cornado Mina Non ha denunciado la ocultación de los impactos del proyecto y la única versión de la empresa como buena por parte de los grandes medios de comunicación.

Por otro lado, la empresa se niega a hacer pública la información sobre el drenaje de la mina de Touro y ha utilizado la vía judicial para impedir el acceso de Ecologistas en Acción al expediente del proyecto. En el recurso interpuesto, la compañía acusa a esta organización ecologista de manipular y tergiversar información relativa a la minería.

Adaptabilidad

Enfoque temporal flexible

En 2017 se presentó el proyecto ante la Consellería de Industria; en 2018 comenzó el procedimiento ambiental que concluyó dos años después con una valoración negativa. Diferentes departamentos de la Xunta elaboraron 15 informes cuyas conclusiones desestimaron los argumentos de la compañía. En la consulta pública, la Xunta recibió alrededor de 1.200 alegaciones.

En 2021, la compañía ha realizado un segundo intento de impulsar la mina de Touro. Según la plataforma Cornado Mina Non, el nuevo proyecto se justifica con “la excusa de la

transición energética”. Mientras que la empresa asegura que va a construir una planta de tratamiento de aguas y restaurar los pasivos ambientales en la zona.

Recientemente, la Diputación de A Coruña pidió a la Xunta de Galicia que inste a la empresa llevar a cabo una restauración ambiental completa de todos los cauces fluviales afectados por la contaminación derivada de las filtraciones de las operaciones mineras previas.



Impactos

Dimensión económica

La reapertura de la mina afectaría en la primera fase 689 hectáreas y pueden acabar siendo explotadas 2.000. Gran parte de este territorio tiene uso agrícola y forestal, así que su destrucción afectaría a la economía local. Se añade también el impacto al sector turístico ya que la explotación se ubica a menos de medio kilómetro del Camino de Santiago.

La puesta en marcha de esta mina sumaría más balsas de residuos mineros a las que ya existen y están abandonadas. En el caso de la rotura de alguna de las balsas, los lodos tóxicos se transportarían por el río Ulla hasta la ría de Arousa causando, no sólo un desastre ambiental sino también, una fuerte crisis socioeconómica ya que miles de personas viven del marisqueo, pesca y el turismo en la ría.

Respecto a la creación de empleo, no hay certeza sobre los 400 puestos de trabajo en 14 años que presenta la compañía. De hecho, las experiencias de otras explotaciones rebajan sustancialmente el número de empleos creados.

Dimensión ambiental

La existencia previa de actividad minera en Touro desde los años setenta ha mostrado el grado de destrucción ambiental asociada a este tipo de actividad. Los residuos de la mina en las balsas de Bama y Angumil tiene vertidos constantes de aguas ácidas y metales pesados contaminando diversos cauces.

Desde el abandono de la mina en 1986, la zona no solo no ha sido correctamente restaurada sino que se ha utilizado como vertedero. A la par, la reapertura de la mina supondría un elevado consumo de agua porque la separación de cobre puede llegar a requerir 2,5 millones de metros cúbicos de agua al año. Hecho que empeoraría la situación de los cauces y suelos y también un incremento del ruido y contaminación atmosférica por las explosiones y el transporte.

Dimensión política

La concesión de la explotación se ha mantenido a pesar de que debía haber caducado. Se han realizado sondeos sin los permisos legales y durante la gestión de los trámites no se han respetado las normas de transparencia, acceso a la información y participación pública.

Le sigue una total irresponsabilidad por parte del Estado al permitir una balsa de residuos mineros a 200 metros de una población. En el caso de una rotura de la balsa, ese núcleo podría desaparecer bajo el vertido.

Dimensión sociocultural

La aldea de Arinteiro podría quedar encajonada entre un depósito de estériles y una balsa de lodos que puede medir 81 metros de altitud.

Aparte, la financiación de los medios de comunicación locales impide la publicación de una información veraz sobre la situación actual de las instalaciones y de las repercusiones que puede tener su reapertura. La creación y el apoyo de organizaciones favorables a la mina refuerza la situación de conflicto entre la población.





Resistencias de la sociedad civil²³

Resistencia integral

La oposición a la mina de Touro ha contado con un elevado apoyo social que ha mostrado su rechazo en diferentes movilizaciones. Conseguir una fuerte movilización social ha requerido un trabajo intenso de pedagogía, sensibilización y formación. Se instalaron mesas informativas en ferias, fiestas y espacios públicos, se multiplicaron las charlas informativas con las vecinas y especialistas en medio ambiente y minería. Un reflejo de esta movilización fue la manifestación multitudinaria que se celebró en junio de 2018 en Santiago de Compostela. La demostración de apoyo también se ha visibilizado a través de las 26.000 firmas recogidas de forma presencial y las casi 70.000 firmas de rechazo a la mina que se han conseguido a través de una plataforma digital.

Se han denunciado la financiación de la empresa para la construcción de un relato favorable al proyecto por parte de los medios de comunicación públicos gallegos, el Instituto de investigaciones marinas del CSIC, Instituto Tecnológico para el Control del Medio Mariño de Galicia y el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, entre otros.

La incidencia para tener respaldo institucional se ha materializado en conseguir que 44 concejos y 2 diputaciones aprobaran mociones contra la reapertura de la mina. También acudiendo al Defensor del Pueblo, que en mayo de 2019 emitió una resolución contra la gestión de los permisos.

23. El apartado de Resistencias incluido en los estudios de caso contiene sólo una muestra de las diferentes estrategias y herramientas que las comunidades afectadas han empleado en sus procesos de resistencia. Un análisis completo de las herramientas y estrategias utilizadas se incluirá en la guía “Claves de resistencia ante megaproyectos” que se publicará próximamente.

3.2

Mina de estaño y wolframio en San Finx, A Coruña

- 📍 Localización: Lousame, A Coruña, Galicia
- 🏠 Mineral: Estaño y wolframio
- 👤 Empresa: Raffaella Resources
- ⚙️ Estado: Operativa
- 📄 Historia: Operativa en los periodos 1884-1990, 2009-2013, 2015-actualidad
- 📄 Más información: www.sacyrservicios.com/-/grupo-minero-san-finx



Patrones: ¿cómo operan las empresas?

Opacidad

Cadena global del megaproyecto

La mina de San Finx estuvo operativa desde finales del siglo XIX hasta que se clausuró en 1990. En 2009 se reabrió por la sociedad Incremento Grupo Inversor, cuyas operaciones terminaron en 2013 al declararse la empresa en quiebra.

En 2015, Valoriza Minería (filial de Sacyr) adquiere los derechos sobre la mina a través de su subsidiaria Tungsten San Finx (controlada al 100% por Sacyr).

A principios de 2022, la compañía australiana Raffaella Resources (a través de su filial Biscay Minerals) compró a Sacyr el 100% de la mina de San Finx. Dado que la mina permanece cerrada desde 2017, en el acuerdo de compra con Sacyr se establece que la transnacional sólo comenzará a desembolsar el precio estipulado para la compra cuando haya logrado extraer mil toneladas de mineral.

Desarrollo de la contienda política

En 2014 y 2015, Valoriza Minería realizó dos solicitudes de subvención en proyectos de I+D para mejorar la tecnología de las perforaciones mineras, que le fueron concedidas en consorcio con la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Posteriormente, Valoriza Minería ha recibido financiación de la UE a través de varios proyectos europeos y mediante la Iniciativa de Materias Primas.

Relato oficial

Según el director general de Rafaella Resources, “nuestra intención es poner en marcha un proyecto de larga vida, en el que se pueda aprovechar el recurso mineral existente en la zona, generando empleo de calidad y sin consecuencias dañinas para el entorno”.

Multi-dimensionalidad

Estrategia legitimadora

Para responder a la contestación social generada por el proyecto minero, la Fundación Sacyr (la anterior propietaria) impulsó iniciativas de innovación y acción social, así como de fomento del voluntariado y la conciliación entre su plantilla.

En Lousame, además, se ha puesto en marcha un museo minero para promocionar una imagen positiva de la industria minera.

Estrategia coercitiva

En 2017 Valoriza denunció a la asociación Adega por tomar muestras de agua en sus terrenos para medir la contaminación que estaba vertiendo y a otra asociación, Verdegaia, por tomar fotos de las instalaciones de la mina que sirvieron para demostrar obras ilegales. La denuncia no prosperó y la nueva empresa Rafaella Resources ha denunciado a Verdegaia, Ecoloxistas en Acción y Comunidade do Monte Veciñal de Grixoa de Esternande por entrar de forma ilegal a un terreno de la minera cuando dicho terreno era municipal y la entrada se realizó para una plantación de robles.

Adaptabilidad

Enfoque temporal flexible

El director general de Energía e Minas de la Xunta de Galicia ha sido imputado por las actuaciones en la mina de San Finx. La ausencia de estudio de impacto ambiental, los vertidos de aguas residuales, la falta de control y de asunción de responsabilidades por la situación de las balsas mineras llevaron a la Fiscalía de Medio Ambiente a abrir diligencias penales al respecto en 2017, al advertir de la actuación de la empresa y también de la Xunta en relación con la posible comisión de un delito contra el medio ambiente.



Impactos

Dimensión económica

En los años treinta del siglo XX se construyó una presa con capacidad para almacenar 8.400 metros cúbicos de residuos mineros que colapsó en 1960 causando un importante vertido de lodos que afectaron al río San Finx y cubrieron numerosas fincas impidiendo su uso agrícola. La destrucción generada no ha sido asumida por ninguna de las empresas que han explotado la mina sino por la población local y por las administraciones públicas.

Persiste la contaminación de la ría de Muros-Noia, donde más de 1.500 familias viven del marisqueo y que está a solo 7 kilómetros aguas abajo de la mina. La perspectiva de la ruptura de una de las presas abandonadas con residuos mineros ha generado oposición en la población porque supondría la destrucción de más ríos, arroyos y la ría.

En el plano laboral, los trabajadores del anterior periodo de actividad denunciaron accidentes y el impago de salarios tras el cierre en 2013.

Dimensión ambiental

Durante el siglo de actividad de la mina no se han tenido en cuenta los llamados drenajes ácidos que van saliendo de la mina, activa e inactiva, hasta los cauces próximos. Han aparecido restos de cobre, cadmio y zinc sin ningún tipo de tratamiento en las aguas. Las mediciones por debajo de la mina han registrado concentraciones de estos metales pesados por encima de los umbrales máximos permitidos y el resultado está siendo la acidificación y la pérdida de las condiciones adecuadas para mantener la vida en los ríos y arroyos de la zona.

La reapertura de la mina pretende continuar con la misma autorización de vertidos. Augas de Galicia mantiene el permiso de vertidos que ya existía para evitar poner sanciones a la empresa. Al mismo tiempo, la actividad minera puede dar lugar a un millón de metros cúbicos de aguas residuales de carácter ácido y con metales pesados.

Dimensión política

En 2009 la mina se reinició sin actualizar el proyecto ni impacto ambiental ni plan de restauración, especialmente de las balsas de residuos mineros. Estas irregularidades no tuvieron ninguna consecuencia para la empresa ejecutora. Es más, la administración pública encubrió a la compañía afirmando que ya existían metales pesados de forma natural en la zona. Se añade a los encubrimientos las continuas barreras de la Administración para evitar la información pública y las demandas legales de organizaciones ambientales y comunidades afectadas.

Dimensión sociocultural

Se replica la situación de Touro y se reproduce la financiación de los medios de comunicación locales que impide la publicación de una información objetiva sobre la contaminación existente y las amenazas ambientales, sociales y económicas de continuar la actividad minera. Se suma la mercantilización de la academia por la publicación de documentos que han sido financiados por la compañía para generar un discurso técnico favorable a la mina.



Resistencias de la sociedad civil

Énfasis en la investigación y comunicación

Las comunidades locales opuestas al megaproyecto han contrarrestado la capacidad de la empresa para legitimar su actividad extractiva. Frente a la alianza entre compañía e instituciones públicas y el elevado presupuesto invertido en medios de comunicación, patrocinio y academia, estos colectivos anti-mina se han articulado con especialistas y sectores críticos de la academia para elaborar materiales que documenten los daños y riesgos de la extracción minera.

Por otro lado, se obtuvieron pruebas directas como fotografías de acciones irregulares de la empresa o muestras de agua para revelar la contaminación en los ecosistemas. También se consiguió un informe de Augas de Galicia que desmentía a la empresa y a la Dirección General de Minas sobre la naturaleza y estado de las balsas mineras y se instaba a su demolición. Acciones de investigación necesarias para documentos y denuncias, imprescindibles en la acción social y política de las resistencias.

3.3

Mina de litio en San José Valdeflópez, Cáceres

- 📍 Localización: **Cáceres, Extremadura**
- 🏗️ Mineral: **Litio**
- 👤 Empresa: **Tecnología Extremeña del Litio**
- ⚙️ Estado: **Paralizada**
- 📄 Historia: **Operación pendiente de los recursos interpuestos por la empresa**
- 📄 Más información: sanjosevaldeflorez.es y <https://extremaduranewenergies.es/>



Patrones: ¿cómo operan las empresas?

Opacidad

Cadena global del megaproyecto

Valoriza Minería (filial de Sacyr) solicitó en 2015 los permisos de prospección, que fueron aprobados en 2016. En ese año se creó la sociedad minera Tecnología Extremeña del Litio, compuesta por Sacyr y la compañía australiana Plymouth Minerals. En 2017 el permiso de exploración se amplió y se solicitó el inicio de un proyecto de explotación minera.

La compañía australiana adquirió posteriormente más acciones de la sociedad y cambió su denominación a Infinity Lithium.

En 2022, la filial encargada del proyecto ha sido rebautizada como Extremadura New Energies, para dar la imagen de que formalmente se trata de una compañía española.

Desarrollo de la contienda política

El gobierno español identificó cuatro grandes yacimientos de litio en Extremadura. Actualmente no hay ninguno de ellos en funcionamiento, pero ya se han dado diferentes pasos en la Junta de Extremadura para intentar tramitar los primeros, dos de ellos en el paraje de Valdeflópez. Hasta la fecha, el ayuntamiento de Cáceres se ha opuesto frontalmente a la mina de litio, que se desarrollaría a apenas 2 kilómetros de la ciudad.

Relato oficial

El consorcio integrado por Infinity Lithium y Sacyr promociona el proyecto minero como la segunda mayor mina de litio en Europa: una inversión de 530 millones de euros con una proyección de negocio de 7.600 millones de euros, que generaría durante sus 26 años de funcionamiento 710 empleos directos y 1.600 empleos indirectos, con la promesa de que el 80% de los empleos serán locales.

Multi-dimensionalidad

Estrategia legitimadora

“Nuestro objetivo es ayudar a facilitar la transición energética de Europa”, dice la publicidad de Extremadura New Energies. La corporación alardea de que en el proceso se utilizarán energías renovables e hidrógeno verde.

Según David Valls, director de Infinity Lithium en España, “la ciudad tiene una oportunidad única en ser pionera en la cadena de valor del coche eléctrico”.

Estrategia coercitiva

Las organizaciones ecologistas de Cáceres se han agrupado en la plataforma Salvemos la Montaña para denunciar el impacto que la mina tendrá sobre el medio ambiente y las personas que residen en la ciudad. En respuesta, Infinity Lithium ha anunciado una modificación sustancial en el proyecto de Valdeflórez transformando la mina a cielo abierto en subterránea. Con este cambio, el área de extracción se reduciría un 30%.

Por su parte, la corporación municipal ha recurrido a la vía judicial y ha pedido al juez suspender la decisión de la Junta y seguir investigando en la mina de Valdeflórez. Tecnología Extremeña del Litio sigue impugnando la cancelación del permiso por parte de la Junta de Extremadura, por lo que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo.

Adaptabilidad

Enfoque temporal flexible

La empresa ha presentado el aval de la Comisión Europea como respaldo, pero el ayuntamiento ha rechazado otorgar los permisos de explotación. Tecnología Extremeña del Litio ha elevado un recurso de alzada y ha amenazado con seguir la vía judicial. Según la compañía, la denegación no se basa en motivos jurídicos. Sin embargo, el plan general de urbanismo de Cáceres tendría que ser modificado para que se pudiera iniciar el proyecto.

En mayo de 2021, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó una moción que instaba a blindar la zona ambientalmente. Actualmente el proyecto está paralizado. A pesar de esta oposición social e institucional, la empresa intenta seguir adelante con el cambio de tipo de extracción, de cielo abierto a subterráneo, en octubre de 2021.



Impactos

Dimensión económica

El límite de la mina está a menos de 3 kilómetros del casco urbano, lo que supondría contaminación acústica, atmosférica, del suelo y el agua, la destrucción del territorio cercano y de gran valor ambiental. También la principal actividad económica de la ciudad, el turismo, se vería afectada, la cual emplea actualmente a una parte importante de la población.

Aunque la empresa divulga que va a generar empleo -afirman que en torno a 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos-, el proyecto registrado solo plantea 195. De ellos, un 15% para personal poco especializado que será el que pueda cubrir la población cercana.

Dimensión ambiental

La mina supondría la destrucción de 13.500 metros cuadrados y de la única arboleada autóctona en la zona, conocida como La Montaña.

Se ha calculado que el proyecto minero puede requerir hasta 2 millones de litros de agua para obtener una tonelada de mineral; agua procedente de los acuíferos de la zona. Por otro lado, el lavado del mineral produce aguas ácidas con metales pesados que se almacenan en balsas. Aunque se afirme que estará impermeabilizado pueden darse filtraciones que pueden contaminar el acuífero que alimenta los cursos fluviales del territorio. El riesgo de contaminación también afectaría a la llegada de drenaje ácido al embalse de Guadiloba del que Cáceres toma agua para el abastecimiento de su población.

La compañía pretende sortear las denuncias de la futura destrucción ambiental presentando otro proyecto de carácter subterráneo. Pero la pendiente media del Valle de Valdeflores obligaría a generar un desmonte importante de las laderas y el nuevo proyecto sigue manteniendo el riesgo de contaminación por el uso de ácido sulfúrico y sulfato potásico.

Dimensión política

La empresa realizó sondeos, balsas y caminos de acceso a la zona de explotación sin realizar el estudio de Impacto Ambiental ni tener licencia municipal para avanzar estos trabajos; ambas de obligado cumplimiento. La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Minas, había dado vía libre para los trabajos de investigación de la empresa a pesar de las irregularidades. Pero la presión ciudadana -los litigios y las alegaciones al proyecto- hicieron que la Dirección General de Medio Ambiente sancionara con una multa simbólica a la empresa y la obligación de restaurar las zonas deterioradas. Tecnología Extremeña del Litio se ha negado a la ejecución de las sanciones. Finalmente, la consejería de la Junta de Extremadura ha denegado el permiso de investigación en parte de la explotación.

+

Se ha denunciado el uso de puertas giratorias para incrementar la influencia de la compañía minera como es el caso del ex concejal de Ciudadanos en Cáceres, el cual dejó la política para convertirse en el asesor y responsable de relaciones institucionales de la empresa.

Dimensión sociocultural

Los principales daños socioculturales se relacionan con la destrucción del Santuario de Virgen de la Montaña, que es un espacio de gran valor cultural, religioso, paisajístico, ecológico y de ocio para la población cacereña.



Resistencias de la sociedad civil







Resistencia flexible

Salvemos la Montaña de Cáceres ha conseguido sostener su respuesta durante cinco años cuando parecía que el proyecto se frenaba. En 2021, la compañía hizo un buzoneo con información favorable a la mina. Se consiguió responder a través de redes sociales y de una cadena humana que conectó con 3.000 personas la plaza mayor de Cáceres y el santuario Virgen de la Montaña, para visibilizar dos símbolos del valor cultural e histórico de la ciudad que podrían ser dañados con la mina.

Dado que dejar bajo tierra la mina no solucionaría la contaminación y el fuerte impacto ambiental que tendría el proyecto, la plataforma sigue vigilante y envió una carta a la ministra de Transición Ecológica cuando hizo una visita a la ciudad en abril de 2022 para frenar definitivamente la licencia a la minera.



3.4 Mina de Uranio en Retortillo, Salamanca

-  Localización: Retortillo, Salamanca, Castilla y León
-  Mineral: Uranio
-  Empresa: Berkeley
-  Estado: Denegado el permiso
-  Historia: Autorización denegada en 2021 por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
-  Más información: www.berkeleyenergia.com/es/proyecto



Patrones: ¿cómo operan las empresas?

Opacidad

Cadena global del megaproyecto

En 2009, la minera transnacional Berkeley llegó a un acuerdo con la compañía pública de uranio, Enusa, para explotar conjuntamente las minas de Salamanca. En 2012 el acuerdo se rompió ante la ausencia de rentabilidad del proyecto. Berkeley denunció a Enusa en los tribunales internacionales por la ruptura del contrato y consiguió quedarse con el 100% del consorcio, así como con una serie de reservas de uranio entre las que se encontraba el proyecto de Retortillo.

En los años siguientes, la empresa solicitó los permisos necesarios para empezar las operaciones de explotación de la mina de uranio y la proyección de una planta de tratamiento del mineral. En 2016, la empresa inició la fase de desarrollo y comenzaron las obras en la carretera y la línea eléctrica, previas al inicio de las construcciones principales.

En 2017, el sultanato de Omán financió con 100 millones de euros la construcción de la futura planta de concentrados, aunque dicha planta no contaba con las autorizaciones pertinentes. Tras obtener financiación de los inversores y mercados internacionales, Berkeley comenzó a cotizar en las bolsas internacionales, siendo la única minera que cotiza en el mercado español.

En julio de 2021, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegó la autorización al plan de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo por “las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva de la planta”.

En noviembre de 2021, el fondo soberano de Omán dio por terminada su participación en el proyecto y exigió a Berkeley el pago de una deuda de 56 millones de euros.

Desarrollo de la contienda política

Entre 2013 y 2016, la empresa intentó conseguir los permisos necesarios a través de un lobby en el que el papel fundamental lo jugaba Manuel Lamela, subsecretario de Miguel Arias Cañete en el Ministerio de Agricultura. A finales de 2014, Lamela inscribió a su despacho personal, Accountax, en el registro de lobbies de la Unión Europea; declaró a la minera como su único cliente y a él mismo como el único lobista. Un mes antes, Miguel Arias Cañete era nombrado comisario europeo de Energía. En 2015, Arias Cañete firmó el dictamen positivo de la Comisión Europea para la mina de Retortillo.

Entre las administraciones públicas e instituciones que han emitido informes favorables al proyecto de Retortillo se encuentran la Junta de Castilla y León; ayuntamientos de Retortillo, Villavieja, Villares de Yeltes y de Vitigudino; y la Confederación Hidrográfica del Duero.

Relato oficial

Según la compañía, el proyecto de Retortillo supondría una inyección de 400 millones de euros y más de 1.000 puestos de trabajo. Berkeley llega a afirmar haber recibido más de 25.000 solicitudes de empleo. Al mismo tiempo, esta compañía promete que el proyecto aportará riqueza a la zona a lo largo de 14 años (durante las fases de construcción, producción y clausura), y que el 80% de la inversión se concentrará en Salamanca.

Multi-dimensionalidad

Estrategia legitimadora

Desde que se inició el proyecto la compañía realiza contribuciones económicas por valor de 470.000 euros a los municipios de Retortillo, Villavieja y Villares de Yeltes más cercanos a la explotación de uranio, los cuales han firmado un acuerdo de colaboración con la empresa. Estas aportaciones económicas han servido para la mejora de instalaciones deportivas, estaciones de depuración de aguas, parques públicos, etc.

Estrategia coercitiva

Las personas más visibles de la plataforma Stop Uranio han sufrido la criminalización de la empresa a través de una denuncia por injurias y calumnias donde solicitaban a los demandados medio millón de euros en concepto de “daños al honor de la compañía”. Todo ello con un objetivo claro: generar miedo y desarticular las protestas ciudadanas. Como respuesta, Stop Uranio y otras organizaciones sociales pusieron en marcha un proceso legal de defensa y una campaña mediática de respuesta a la criminalización. Finalmente, la demanda de la empresa fue desestimada.

Adaptabilidad

Enfoque temporal flexible

A finales de 2021, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunicó a Berkeley la denegación de la autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio en Retortillo. Y la transnacional, cuyo máximo accionista es ahora el fondo de Omán, amenaza con presentar demandas ante los tribunales internacionales.



Impactos

Dimensión económica

El proyecto conlleva la destrucción de un territorio que es utilizado por las comunidades locales para la ganadería y agricultura. También tendría como consecuencia el cierre del balneario de Retortillo por la proximidad a la explotación; actividad que emplea de forma estable a 65 personas de la zona, principalmente mujeres.

Dimensión ambiental

Al tratarse de una mina a cielo abierto, su puesta en marcha traería explosiones que conllevan contaminación atmosférica y acústica. Además, la extracción del uranio y la proyección de una planta de tratamiento de este mineral esconde el riesgo de escapes radiactivos.

La mina afectaría al río Yeltes, perteneciente a la Red Natura 2000. Asimismo, el punto de vertido de las aguas utilizadas para la explotación de la mina se sitúa aguas arriba de la toma de aguas para el pueblo de Villavieja de Yeltes.

Durante la primera fase del desarrollo del proyecto, la compañía taló 40 hectáreas de arbolado y desvió una carretera comarcal que conecta dos de las localidades afectadas.

Dimensión política

El inicio del proyecto estuvo marcado por irregularidades. La declaración de impacto ambiental de la mina debía haberse realizado en el Ministerio de Medio Ambiente (ahora Ministerio de Transición Ecológica), pero fue el gobierno autonómico de Castilla y León quien hizo la declaración y fue positiva. Una vez aprobada la declaración, aunque de forma irregular, el ex ministro de industria José Manuel Soria aprobó una autorización previa para abrir la mina y la Confederación Hidrográfica un permiso para realizar vertidos.

Los concejales del gobierno municipal de Retortillo, municipio donde se localiza el proyecto, eran a la vez trabajadores de Berkeley. El alcalde, por su parte, fue denunciado



por prevaricación en la venta de terrenos autorizando el uso excepcional de suelo rústico para la construcción de las instalaciones mineras. La compañía firmó convenios de colaboración con los ayuntamientos implicados en los que se recogía la obligación de éstos de emitir informes favorables en la tramitación de permisos.

También han sido conocidas las presiones que la empresa y representantes de la Junta de Castilla y León han ejercido sobre el Consejo de Seguridad Nacional para la aprobación del proyecto.

Dimensión sociocultural

Se ha incrementado el enfrentamiento entre la población que se opone a la mina y quienes tienen la expectativa de ser empleados por la empresa. Se han producido amenazas, destrucción de materiales de protesta y rotura de las lunas de los coches de miembros de la plataforma Stop Uranio.



Resistencias de la sociedad civil

Articulación de agentes diversos en el territorio

La Plataforma Stop Uranio está formada por vecinas y vecinos y por miembros de colectivos sociales y ecologistas. En la organización de movilizaciones han contado con el apoyo de otros actores, como organizaciones e instituciones portuguesas, potencialmente afectadas por la mina. En el país vecino existe una especial sensibilización por las consecuencias de las minas de uranio al haber víctimas entre trabajadores mineros y sus familias.

A todo ello se le añade la articulación con las resistencias frente a otros proyectos mineros de Ávila, A Coruña y Cáceres. En el plano de la mayor comunicación entre procesos de resistencia minera, destaca el congreso celebrado en la Universidad de Granada “Minería y extractivismo. Diálogo entre la academia y los movimientos sociales”.

4. Conclusiones

+ En los últimos años se ha multiplicado el interés de empresas y fondos de inversión por la extracción de minerales metálicos en el Estado español. Hasta 2021 se habían concedido **548 licencias para este tipo de proyectos**, la gran mayoría en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura.

+ Las instituciones europeas y españolas promueven este *boom minero* y lo presentan como imprescindible para lograr la Transición Energética y la Digitalización de la economía europea. La construcción de infraestructuras de energías renovables y la electrificación de la movilidad, según lo plantea la Unión Europea, **multiplicarán la demanda de minerales como aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso, cobalto, tierras raras y litio**, para cuya obtención hoy día Europa depende en gran medida de regiones como China, Australia o América Latina.

+ Esta narrativa se sustenta, sin embargo, en un tipo de transición energética basada fundamentalmente en una **sustitución de la fuente de energía** (combustibles fósiles por energía eólica o solar) **sin cuestionar nuestros patrones de producción y de consumo ni la cantidad de materias primas** que este modelo necesita. Al mismo tiempo, se apuesta por expandir las operaciones mineras sin priorizar de una forma real el aprovechamiento máximo de los materiales que ya han sido extraídos, mediante un alargamiento de la vida de los productos y la reutilización y reciclaje de los metales.

+ El discurso de la “minería sostenible” también obvia el fuerte componente **especulativo** de una gran parte de estos proyectos, negocios en los que no importa tanto la extracción de minerales como **la especulación con los derechos sobre los mismos, y que busca el beneficio a corto plazo** sin tener en cuenta los impactos socioecológicos de la actividad.

+ La consecuencia es una profundización en la vía del extractivismo: **seguir extrayendo materiales obviando los límites biofísicos del planeta**, ignorando los impactos de este tipo de proyectos y pasando por encima de los derechos de las personas y comunidades afectadas.

+ Los proyectos mineros responden, además, a **la lógica de los megaproyectos: iniciativas de significativo tamaño e inversión lideradas por empresas transnacionales** cuyo objetivo es apropiarse de territorios y bienes naturales en favor de la acumulación del capital, amparados por una asimetría normativa entre la fuerte protección de los intereses de los grandes capitales, por un lado, y la nula justiciabilidad de los derechos humanos, por otro. Los megaproyectos conforman un fenómeno sistémico cuyo impacto no se circunscribe a las periferias del planeta, sino que se constata cada vez más en los centros del sistema. En el caso de España, el repunte de los precios del metal tras la crisis de 2008, la minería especulativa y una determinada agenda de transición energética y digitalización han incidido en el auge de los megaproyectos.

+ A pesar de su diversidad, estos megaproyectos presentan parámetros comunes: unos patrones de actuación de las empresas transnacionales en la implementación de este tipo de iniciativas; **impactos sistemáticos a nivel económico, político, ambiental y sociocultural** que además se agravan en función de la clase, género y etnia/raza; y, por último, el desarrollo de experiencias de resistencia popular para poner freno al avance corporativo.

+ A lo largo de este informe, se analizan cuatro proyectos de minería metálica en diferentes puntos del Estado: Touro (A Coruña, Galicia), para la extracción de cobre; San Finx (A Coruña, Galicia), para estaño y wolframio; San Juan de Valdeflórez (Cáceres, Extremadura), para litio; Retortillo (Salamanca, Castilla y León), para uranio. A pesar de su diferente localización, la diversidad de materiales extraídos y que detrás de ellos hay empresas diferentes, el análisis de estos casos ilustra la existencia de los parámetros estudiados en los megaproyectos, demostrando que **los impactos adversos y el *modus operandi* de los actores económicos implicados no constituyen casos particulares de negligencia o mala praxis particular, sino que se trata de una cuestión sistémica.**

5. Notas

1. Ramón Fernández Durán, “Población, economía y ocupación del territorio”, en José Manuel Naredo y Fernando Parra (eds.), *Situación diferencial de los recursos naturales españoles*, Lanzarote, Fundación César Manrique, 2002, pp. 49-188.
2. Pedro Ramiro y Erika González, *A dónde va el capitalismo español*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2019.
3. David Harvey, *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014.
4. Evgeny Morozov, *Capitalismo big tech. ¿Welfare o neofeudalismo digital?*, Madrid, Enclave de Libros, 2018.
5. Meadhbh Bolger, Diego Marin, Adrien Tofighi-Niaki y Louelle Seelmann, “*Green mining*” is a myth: The case for cutting EU resource consumption, European Environmental Bureau y Friends of the Earth, 2021.
6. Comisión Europea, *Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study*, 2020.
7. Comisión Europea, *El Pacto Verde Europeo*, COM(2019) 640 final, 11 de diciembre de 2019.
8. Agencia Internacional de la Energía, *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, World Energy Outlook Special Report, 2021.
9. Parlamento Europeo, “Materias primas fundamentales: la UE debe asegurarse un suministro propio”, 24 de noviembre de 2021.
10. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las Materias Primas Minerales”, agosto de 2022.
11. Para consultar toda la información actualizada sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, véase la página web oficial del Gobierno de España: <https://planderecuperacion.gob.es/>
12. Para una revisión en detalle de lo que suponen los megaproyectos en el capitalismo global y un análisis de sus características fundamentales, véase: Gonzalo Fernández, Erika González, Juan Hernández y Pedro Ramiro, *Megaproyectos: claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde y digital*, OMAL, 2022.
13. Danae Tapia y Paz Peña, “Oro blanco, destrucción digital”, *ALAI – América Latina en movimiento*, n° 554, noviembre de 2021.
14. En todo caso, no se puede limitar la agenda de las grandes empresas únicamente a los megaproyectos. Su rol clave en el cambio climático y la depredación de bienes naturales; su apropiación del sector estratégico de los datos y la inteligencia artificial en términos de horizonte económico y control social; su ofensiva antisindical y de precarización laboral; su apuesta por las finanzas como principal ámbito de reproducción del capital, contribuyendo así a una economía aún más cortoplacista y vulnerable, así como a una ciudadanía menos autónoma; su incidencia política, desde lo global hasta lo local, en favor de entornos competitivos (esto es, precarización laboral, rebajas fiscales, ayudas públicas, centros de innovación, etc.); o el *greenwashing* permanente a través de sus anuncios publicitarios y sus estrategias de “responsabilidad social”, son todas ellas también herramientas de impacto sobre nuestras vidas.
15. La UE establece 27 materiales críticos objeto de protección y ayudas.
16. Gonzalo Fernández, “El poder corporativo al asalto de los territorios. Claves para la resistencia popular a los megaproyectos”, en VVAA, *Territorios en conflicto. Claves para la construcción de alternativas de vida*, Gernika Gogoratuz, 2019.
18. Miriam García-Torres, *El Ibex 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista*, Ecologistas en Acción, Calala y OMAL, 2018.

19. Ecologistas en Acción, *Minería especulativa en España*, 2019.

20. Fuente: catastro minero del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; catastros mineros de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura y Galicia.

21. Fuente: catastro minero del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; catastros mineros de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura y Galicia.

22. El estudio del que parte este informe desarrolla con más profundidad todas las líneas de resistencia sucedidas en los cuatro casos. Esta información se recogerá próximamente en una Guía de resistencias frente a los megaproyectos.



Acción Protesta
en contra de la Mina de Cáceres





**Amigos de
la Tierra**

“Somos una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Somos un grupo de personas que defendemos la justicia social y ambiental; creemos firmemente que el centro de las políticas han de ser las personas y La Tierra. Así, denunciaremos y presionaremos a empresas y administraciones, a la vez que proponemos diversas soluciones para lograr un mundo más justo”

+ tierra@tierra.org

+ tierra.org

+ [91 306 9900](tel:913069900)



El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, cuya identidad se vincula a la investigación y denuncia sobre las prácticas e impactos de las empresas transnacionales, al seguimiento de las tendencias globales del poder corporativo, así como a la sistematización de alternativas al mismo desde claves emancipadoras

+ omal@omal.info

+ omal.info

+ [915233824](tel:915233824)

